

LA COCINA DE LOS CUIDADOS

MESA
INTERSECTORIAL

informe **#5**

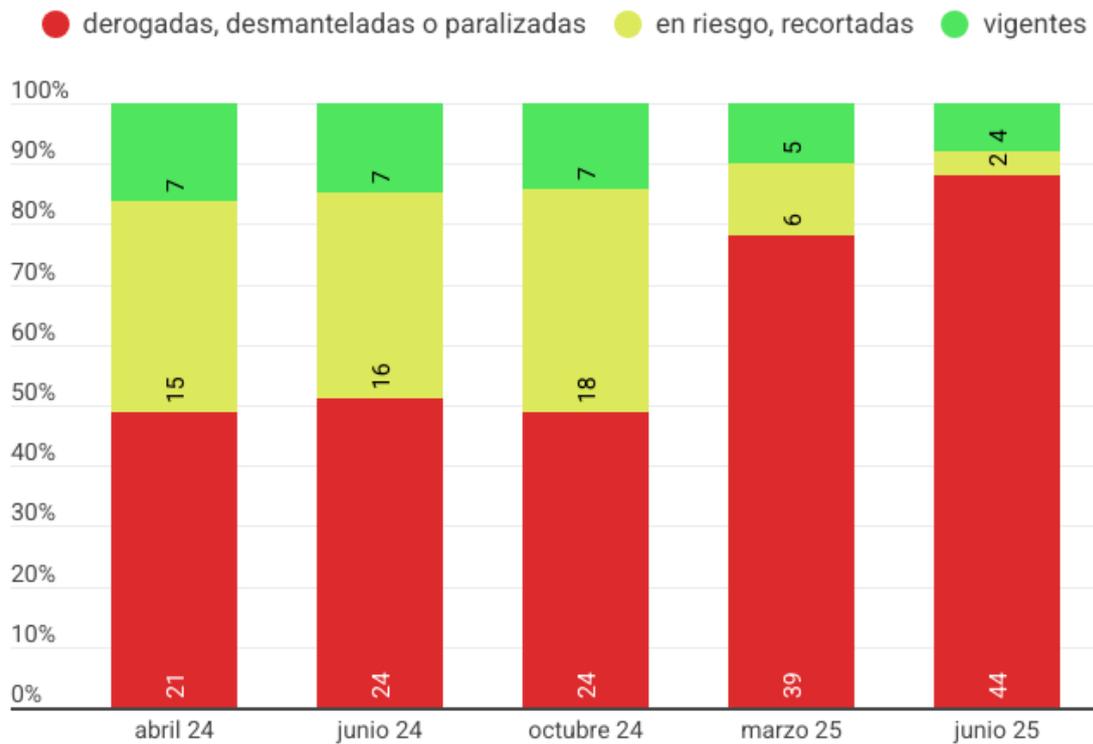


resumen ejecutivo

- En 18 meses de gestión libertaria, sólo queda vigente el 8% de las políticas de cuidado: 4 de 50. [En este [enlace](#) están una por una].
- En este tiempo, 2.866.000 personas perdieron al menos 1 política de cuidado de la que eran destinatarias.
- Las personas mayores deben elegir entre comer o medicarse. Ya sin moratoria previsional vigente, quienes perciben la Pensión Universal para Adulto Mayor (PUAM) necesitan otros \$45.000 mensuales para cubrir una canasta básica total y no ser pobres. La cantidad de personas mayores que tienen los medicamentos cubiertos por PAMI se redujo de 4,6 millones a 3,8 millones.
- Las personas con discapacidad tienen más trámites y menos prestaciones. El porcentaje de rechazos en solicitudes de pensiones por discapacidad creció del 40% al 75% y se revocaron 56.000 pensiones que estaban vigentes. El proceso de auditoría de las pensiones anunciado por el gobierno obliga a desplazarse a personas con discapacidad para cumplir con trámites sin garantizar la accesibilidad en ese proceso.
- Las transferencias de ingresos a las infancias se sostienen –aunque con límites–, mientras se desfinancian todas las políticas que apuntan a la socialización del cuidado infantil en sus distintas formas: vuelta a la crianza “obligada” y “solitaria”. Por otro lado, se desarman las políticas de educación sexual, IVE y métodos anticonceptivos. A largo plazo se reproduce desigualdad.
- Las cuidadoras comunitarias cuentan con menos recursos –les llega poco o nada de alimentos por parte del gobierno nacional– pero todo el barrio les pide igual o más apoyo. Frente a la ausencia del Estado, crece el endeudamiento de las familias.

- Se terminan las políticas que intentaban corregir las desigualdades estructurales en el mercado de trabajo. El gobierno confirma que no cumplirá con la política de cupos, las empresas desarman sus áreas de género, las trabajadoras de casas particulares no reciben aumentos desde enero y las mujeres rurales están en emergencia.

semáforo de políticas de cuidados



introducción

En estos 18 meses de gestión de La Libertad Avanza, se afianzan los patrones del modelo propuesto por Javier Milei para la política económica y social. La apreciación cambiaria, sostenida por un nuevo proceso de endeudamiento, modifica el entramado de consumo y producción del país; al tiempo que se sostiene el ajuste del Estado y de la política social.

Tras una caída del 1,7% del producto bruto interno en 2024, en los primeros meses de 2025 la economía argentina mostró signos de recuperación (6% de crecimiento de la actividad económica). No obstante, la pérdida de empleos registrados que se acumula desde noviembre de 2023 aún no ha sido completamente compensada: el empleo formal en Argentina –entre sector privado y público– sigue 500.000 puestos

abajo del número que recibió Milei al iniciar su gestión. Al primer trimestre de 2025, creció el peso del empleo no asalariado del 25,3% al 27,3% de los ocupados y los ocupados asalariados pasaron de 6,3 a 6,1 millones de personas.

La cocina de los cuidados viene dando cuenta, desde inicios de 2024, del ajuste en las políticas sociales en general y de las políticas de cuidado en particular. En efecto, a junio de 2025, de 50 políticas de cuidado, sólo 4 se mantienen vigentes: el 92% de las políticas fueron recortadas, paralizadas, derogadas, desmanteladas o están hoy en riesgo.

En paralelo al desarme, el gobierno festeja la reducción de la pobreza general y, en particular, de la pobreza infantil, un fenómeno que se origina estadísticamente en la estabilización de la inflación y que se explica, en gran parte, por la actualización del valor monetario de la Asignación Universal por Hijo. Sin embargo, ¿cómo impacta la destrucción de las políticas de cuidado en la calidad de vida de las familias? ¿Qué historias hay detrás de los números de subejecución? ¿Qué procesos silenciosos pueden crecer a largo plazo?

Este quinto informe de *La cocina de los cuidados* actualiza la situación de cada uno de los programas y políticas de cuidado, pero también relata en primera persona el impacto de su reducción en la vida cotidiana, en las familias, en los comedores y en los barrios.

-1-

personas mayores: comer o medicarse

La mamá de Roxana es jubilada de la mínima y tiene PAMI. “Está tomando cinco medicamentos por mes, el antidepresivo, para la presión. De un día para el otro dejó de percibirlos de forma gratuita así que ahora o come o se medica”. A Catalina, jubilada de Rosario con tres patologías crónicas, le pasa algo parecido que a la mamá de Roxana: “No nos alcanza para nada. La carne, que es una fuente de nutrientes, es impagable. La alimentación es un derecho, tenemos que alimentarnos para vivir”. En cuanto al acceso a la medicación, Catalina cuenta que ahora, “a los enfermos crónicos nos cobran igual que por una enfermedad o patología eventual, como puede ser una gripe o una neumonía. Antes las teníamos gratuitamente, ahora si quiero cumplir con el tratamiento tengo que ir a la farmacia y pagar el 50, 60 o el 70% que ya no me cubre PAMI. Por ejemplo, el Optamox Dúo para una neumonía, que es una patología de tratamiento urgente, ahora hay que pagarlo. Y ni hablar de las partidas de vacunas para la gripe de PAMI que ahora no llegan”.

Las jubiladas y jubilados que cobran la mínima y el bono están 5,3% por debajo del poder adquisitivo que tenían en noviembre de 2023. Ya sin moratoria vigente, a

quienes cobran la Pensión Universal para Adulto Mayor (PUAM), les faltan \$45.000 mensuales para poder cubrir una canasta básica total y no ser pobres. Ese monto es aún mayor si se consideran los nuevos costos de los medicamentos. La cantidad de personas mayores que tienen los medicamentos cubiertos por PAMI bajó de 4,6 millones a 3,8 millones.

800mil

personas mayores

dejaron de tener
medicamentos
cubiertos por PAMI

La organización del cuidado de las personas mayores también sigue en retroceso. Las camas financiadas por PAMI en residencias de larga estadía se redujeron de 22.000 a 17.000. Las residencias nacionales del Ministerio de Capital Humano no incluyen nuevas personas desde agosto de 2024 y los subsidios otorgados para contratar cuidadores se redujeron un 18% (pasaron de cubrir 57.300 a 46.593 personas).

La única buena noticia para destacar en tema jubilaciones, es que –según confirmó Anses después de un año de pedidos de información pública– el programa de reconocimiento previsional sigue activo y procesa un promedio de 21.660 trámites por mes. Desde que inició hasta ahora, se jubilaron 657.610 mujeres que contabilizaron como aportes años de cuidado, gracias a este programa.

-2-

discapacidad: más trámites y menos prestaciones

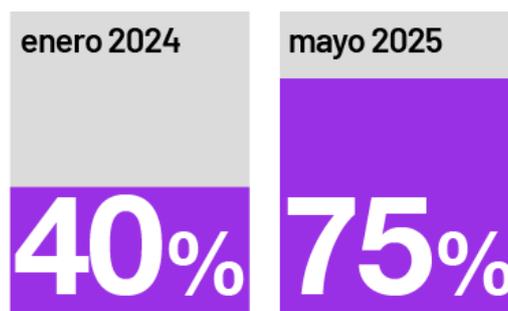
Karina y sus dos hijos sufrieron violencia por parte del progenitor durante años. Santiago y Julián tienen diagnóstico de discapacidad desde muy pequeños, lo que obligó a Karina a dedicarse a tiempo completo a sus actividades y acompañamiento. “Cuando llega el diagnóstico me cae como un baldazo de agua fría. Y tuve que ser el escudo humano de Santiago cada vez que el progenitor lo agredía con palabras hirientes, porque no aceptaba la condición de Santi”. La violencia física que ejerció el progenitor sobre ella en 2015 le dejó hernias de disco y roturas de tendones en las manos, por lo que Karina tiene ahora discapacidad adquirida. Ella contaba con una pensión por discapacidad y estaba a cargo de sus

hijos sin recibir ningún apoyo del progenitor. A Karina le quitaron la pensión. Hace seis meses que hace trámites para pedir que se la devuelvan; desde entonces no tiene ingresos.



En Argentina, cada mes, 63.000 personas solicitan pensiones por discapacidad, de \$262.000 mensuales. En el 60% de los casos quienes las piden son mujeres. Habitualmente, el 40% de esas solicitudes eran rechazadas por distintos motivos. A partir de septiembre de 2024, cuando se hizo incompatible la pensión con el trabajo registrado, el porcentaje de rechazos creció al 75%. Los rechazos por incompatibilidades con el empleo se duplicaron. Al mismo tiempo, se revocaron 56.000 pensiones que estaban vigentes.

Pensiones por discapacidad rechazadas



El proceso de auditoría de las pensiones anunciado por el gobierno exige que las personas se desplacen para realizar los trámites sin garantizar condiciones de

accesibilidad. Todo esto para encontrar irregularidades en el 0,002% de los casos, según afirmó el propio jefe de gabinete. Además, las prestaciones de salud están con montos desactualizados y el sector reclama una ley de emergencia. Acompaña el marco estructural de siempre: el cupo laboral por discapacidad en el Estado nunca llegó a cumplirse y hoy es del 1,47%, cuando debería ser del 4%.

-3-

infancias: vuelta al modelo de “sólo cuida mamá”

A mediados de mayo de 2025, el presidente de la nación planteó frente a empresarios la necesidad de aumentar la tasa de natalidad de Argentina para que no decrezca el tamaño del mercado. También culpó a los feminismos por haber desacelerado el ritmo de los nacimientos en Argentina. Pero la lógica de ese pensamiento no se queda en el discurso, se traduce en políticas públicas: las políticas de educación sexual, interrupción del embarazo y métodos anticonceptivos fueron desarmadas, se sostienen únicamente –aunque con límites– las transferencias de ingresos a las infancias y se desfinancian todas las políticas que apuntan a la socialización del cuidado infantil en sus distintas formas. Pareciera que estamos frente a la vuelta a un modelo que nunca dejamos del todo, el del varón proveedor y la mujer cuidadora.

Dentro de las transferencias directas que sostiene el gobierno se encuentra la Asignación Universal por Hijo. Pero el modelo también tiene sus grietas: la tarjeta Alimentar no se actualiza desde mayo 2024 y ya perdió 43,26% de su poder de compra, la asignación familiar ya es la mitad del monto de la AUH y perdió 1.070.000 beneficiarios. Pero además, en la medida en que no hay un Estado activo que publicite sus políticas, la universalidad de estas transferencias se va limitando. La aprobación de las becas Progresar 2025 recién se comunicó en mayo y junio. Con esta dinámica de retraso y baja difusión, el año pasado el programa tuvo 500.000 titulares menos (la población total pasó de 1,8 a 1,3 mil jóvenes).

Tarjeta alimentar  **43,26%** redujo su poder adquisitivo

Pero también la propuesta es una crianza “solitaria” toda vez que se paralizaron las ampliaciones de la infraestructura de primera infancia en todo el país, que no alcanza a cubrir a los niños y niñas de menos de 5 años. A junio de 2025 sólo

ejecutaron el 24% del presupuesto vigente para ampliación de jardines, que es, a su vez, un 20% menor que el de 2024. El mismo número de ejecución presentan las transferencias a espacios de cuidado comunitario. La paralización de las obras de centros de desarrollo infantil es una postal presente en todo el país. Es el caso de las obras interrumpidas en Tigre y en Malvinas Argentinas.

En Tigre los trabajos fueron paralizados con un 30% de avance de su plan, en tanto que las obras de Malvinas Argentina fueron detenidas habiendo alcanzado un 60% de ejecución. En ambos municipios, acorde a los criterios previstos por el Ministerio de Obras Públicas, las obras están localizadas en barrios con indicadores de alta vulnerabilidad en las infancias como, así también, de escasa o nula infraestructura del cuidado para la franja de 0 a 4 años.

En Malvinas Argentinas señalaron que el CDI estaba pensado, en parte, para recibir y acompañar a niños y niñas dentro del espectro autista, respondiendo así a una necesidad concreta de inclusión y cuidado especializado. En Tigre, las familias del Barrio Garrote destacaron la escasez de espacios de cuidado infantil en la zona y la relevancia que tendría el CDI para aliviar la sobrecarga de cuidados que suelen asumir los hogares, en especial las mujeres.



Partidos de Malvinas y Tigre.

El desarme de la infraestructura de cuidado infantil también muestra la sábana corta de la crianza exclusivamente familiar –y maternal–, que reproduce las condiciones de cada familia y perpetúa la desigualdad. En el municipio de Tres de Febrero, el espacio de primera infancia comunitario “Sandra y Rubén” abrió a inicios de 2020. Construido sobre un terreno cedido por un club, funcionaba por la mañana y estaba proyectado extender su horario. Recibía apoyo de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, aunque esa plata “nunca alcanzó”. Mujeres formadas con una diplomatura en cuidados de la Universidad de La Matanza llevaban adelante el espacio y percibían el Potenciar Trabajo más el “nexo”. En su mejor momento, el espacio recibía 25 niños y niñas, la mayoría menores de dos años, la edad en la que menos oferta de jardines públicos hay cerca del barrio.

Sin apoyo del Ministerio de Capital Humano y sin posibilidad de que las familias del barrio aporten –algo que intentaron–, la sala cerró en agosto del año pasado. Esos 25 niños que ahora ya no están en el jardín, están en sus casas con madres y abuelas, pero principalmente abuelas porque las mamás deben seguir trabajando. Otras veces los cuidan sus hermanos, que también son pequeños.



Tres de Febrero.

Aída es una señora del barrio que llevaba a su nieto a la salita. Ahora lo cuida ella todo el día, y desde las 9 y media de la mañana va al lugar para preparar meriendas y cenas para el barrio. Cree que es mucho lo que perdieron los chicos al no ir más a ese espacio, porque a muchos chicos del barrio ir ahí les armaba una rutina que no tienen en sus casas, les permitía tener una mesa y una silla propia, un lugar, su lugar.

Como muestra final del retroceso en la socialización de los cuidados, el Mapa Federal de los Cuidados, que alojaba direcciones próximas de espacios de cuidados y hasta de cuidadores formados, dejó de estar disponible en internet en abril de 2025.

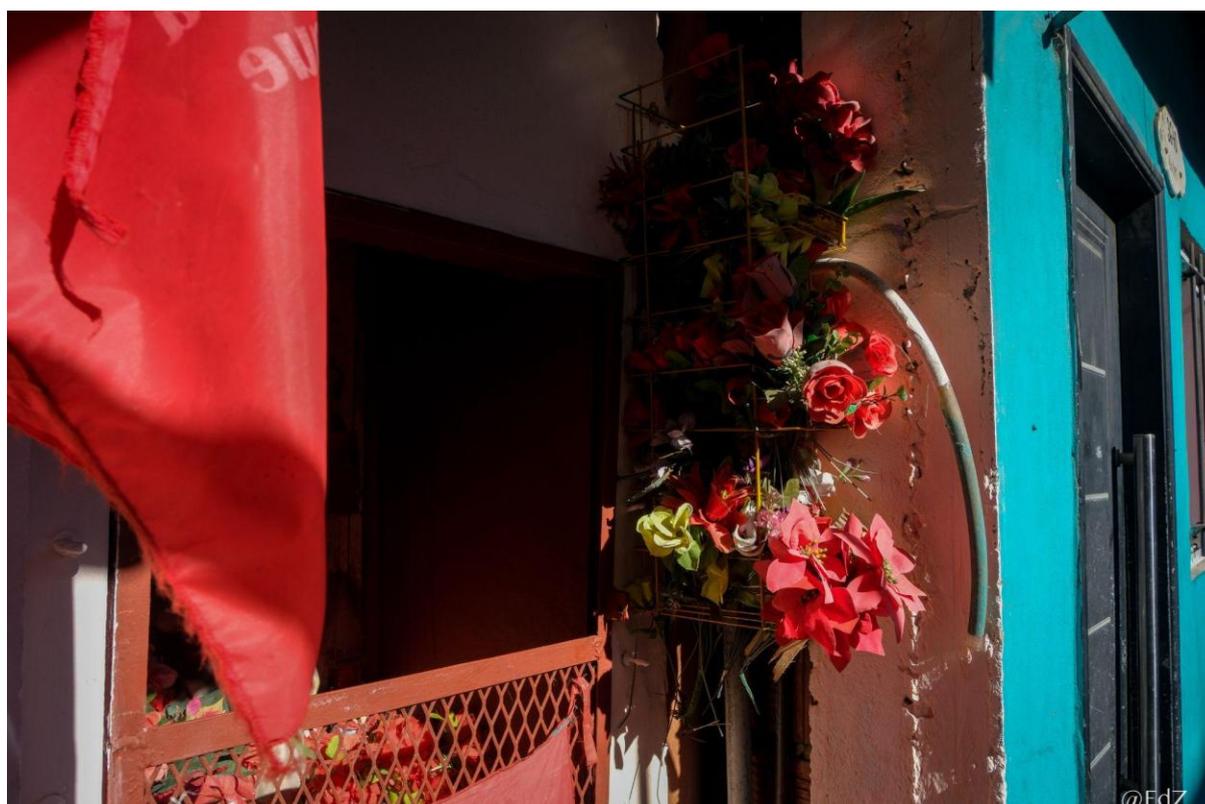
-4- la autonomía en riesgo

Como decíamos más arriba, las políticas de salud sexual y reproductiva fueron desarmadas: ya no hay presupuesto disponible para garantizar la Educación Sexual Integral y la Interrupción Voluntaria del Embarazo. El Plan ENIA, para la prevención del embarazo adolescente, cuenta con un 53% de ejecución –traccionado por un amparo colectivo–, de un presupuesto que se mantiene sin actualización desde 2024. “En agosto de 2024 nos quedamos sin medicación para garantizar abortos en nuestra provincia. También desarmaron los equipos de ESI y queda a criterio de

cada establecimiento. A fines del año pasado, una niña fue obligada a continuar su embarazo cuando la familia había pedido la interrupción del embarazo que habilita la ley”, cuenta Laura Sánchez de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto sobre lo que sucede en Tucumán. Una médica generalista que trabaja en la salud pública de Santa Fe hace veinte años coincide: “Estamos viviendo situaciones numerosas de adolescentes y mujeres jóvenes que se han acercado con embarazos no deseados o no planificados, relatando su dificultad de acceso a métodos anticonceptivos o que acompañemos en la interrupción del embarazo y no contemos con métodos que hubiéramos preferido para las adolescentes, principalmente el implante”.

La ex directora de Salud Sexual y Reproductiva, Valeria Isla, destaca las consecuencias que tiene en las provincias el corte del financiamiento del Estado nacional y la falta de entrega de la canasta básica de insumos para la salud sexual y reproductiva: “La interrupción de la compra y distribución nacional de estos insumos esenciales de salud pública tiene efectos críticos sobre el acceso equitativo de la población. Esto profundiza las desigualdades estructurales entre jurisdicciones: mientras algunas provincias con mayores recursos pueden sostener parte de la provisión, otras quedan completamente desprovistas. Las consecuencias de mediano plazo comprometen la salud, la autonomía y la vida de miles de personas, especialmente de mujeres, adolescentes y personas LGBTIQ+”.

Además de las consecuencias propias del desfinanciamiento nacional, hay un efecto derrame en las decisiones provinciales. En San Luis, Noelia, docente, nos cuenta que con la llegada del nuevo gobernador se lleva adelante la misma línea que el gobierno nacional. “Por ejemplo, la Maternidad Central Provincial no garantiza la interrupción del embarazo en el primer trimestre. La negación total de la información, la dilación, el maltrato en mesa de entrada para que ni siquiera llegues hasta algún profesional de la salud” aparece en el cotidiano de las personas gestantes que buscan acceder a una IVE - ILE en la provincia.



-5-

hacer frente a la estigmatización y el endeudamiento

En los barrios populares también se siente el retiro del Estado en el recorte del monotributo social, el congelamiento del ex Potenciar Trabajo (Volver al trabajo / Acompañamiento social) y la eliminación del “nexo” que cobraban las cuidadoras comunitarias.

Desde la zona sur del conurbano bonaerense, una cuidadora comunitaria, madre sola de 3 niños, nos cuenta: “Además del congelamiento de los trabajos, lo que más nos afectó es la estigmatización de lo que hacemos. Que nos digan planeras, corruptas, a nosotras, y al mismo tiempo nos exijan, nos golpeen la puerta de la casa a las dos de la mañana para pedirnos una leche. Y yo sé que hay compañeras que no tienen y por miedo a esa vecina, le sacan la comida a sus hijas para dársela a una vecina”.

Actualmente, el gobierno asiste sólo a 4.231 comedores, cuando debe asistir a 9.800 espacios inscriptos en el RENACOM. Con menos recursos que antes, en los barrios intentan responder a las necesidades que crecen día a día. Una cocinera comunitaria de San Vicente, en la provincia de Buenos Aires, afirma que “antes, con lo que recibíamos de Nación, podíamos entregar un bolsón de comida por mes, ahora no podemos; lo que hacemos es una olla, una vez por semana”.

Ana Gamarra, integrante del FOL, cuenta lo que sucede en la Ciudad de Buenos Aires: “Acá en CABA han aumentado las familias que se acercan, jubilados, ancianos que con las jubilaciones ya no pueden sobrevivir, con vergüenza a pedir un plato de comida. Muchos tienen trabajos en blanco, pero se acercan porque ya no les alcanza”.

Las necesidades que no pueden resolver, las cubren con endeudamiento, principalmente con plataformas de pago o con el narcotráfico, que avanzan frente a la ausencia del Estado. Las bajas del Potenciar, hechas desde un análisis ineficiente, colaboran con el cuadro: “Se le pide al narco, porque el narco provee organización social, provee mercado y permite que nos endeudemos. Primero, le debés a una tarjeta de crédito, después le debés a la app y después le debés al narco. Yo para poder sostener los medicamentos de mi mamá, me endeudo 300 mil pesos por mes con Mercado Pago y ya le debo 3 millones. El aguinaldo ahora no me sirve ni para tres días de comida de mis hijos”. En efecto, los datos del Banco Central muestran que el endeudamiento con proveedores no financieros de crédito está creciendo desde septiembre de 2024 (Vectorial, 2025).



Karina integra Barrios de Pie en Vicente López y cocina hace 20 años en su casa con otras vecinas. “Cobro un Potenciar Trabajo de 78 mil pesos con otras compañeras que también hacemos el merendero. Después de un tiempo nos pusieron un nexa, que era un doble sueldo, pero al cambiar de gobierno quedó 78 mil, y bueno, las compañeras tienen que buscar otro trabajo, otro sustento. Como yo siempre digo, el salario social complementario siempre queda en el barrio, va al verdulero, al carnicero, a la despensa. Mueve la economía de acá. Pero ahora la economía de acá

se siente frenada porque todos deben, todos tienen cuenta. Mucha gente usa la tarjeta para comprar comida, para comprar la carne”. Karina también señala el aumento de la cantidad de personas que se acerca al merendero todos los días. “Antes de este gobierno acá venían de 20 a 30 chicos, venían niños nada más. Ahora, después de esta crisis que se está viviendo vienen adultos a pedir el mate cocido, la chocolatada, la torta frita, viene más gente a pedir comida. Antes teníamos 50 porciones, ahora tenemos 120, 150, y ahora que viene el frío va a ser más”.

Mónica vive en Gualeguaychú y es parte de La Poderosa. Hace trabajos para una economía del barrio que no arranca: “Ya nadie me va a venir a comprar una mochila desde cero por la situación que estamos pasando. Sí va a venir a que le cambie el cierre, que le arregle una manga. Tengo una compañera con la que trabajamos en las costuras a la par y se tuvo que ir a buscar un trabajo de servicio doméstico, de ayudante de cocina porque no le da”. Mónica también relata cómo afecta la situación económica a los espacios de cuidados comunitarios: “Las mujeres que han estado sosteniendo espacios de la niñez o de la olla popular han tenido que salir a buscar el pan a otra parte. Se han replegado, pero no para sus hogares sino para salir a buscar el pan porque con lo que trae el compañero o si son madres solteras o separadas no alcanza”.

-6-

las mujeres y diversidades no facturan

El desarme de las políticas que intentaban corregir las desigualdades estructurales en el mercado de trabajo se profundiza. “El único requisito (para contratar) es la idoneidad, los méritos y la capacidad del individuo”, respondió el gobierno cuando le consultamos sobre el cumplimiento del Cupo Laboral Travesti Trans. Como si una vida entera de exclusión no pudiera afectar la posibilidad de una persona trans de lograr las mismas habilidades laborales que otras personas.

Con la misma lógica de “idoneidad”, en mayo se derogó el programa Igualar que trabajaba con políticas de igualdad dentro del mundo empresario. “El área de género de la empresa fue reestructurada. Se le cambió el nombre y se orientó a trabajar cuestiones vinculadas a la violencia y gestión de riesgo. Ya no cuenta con la nómina de personal por género para hacer un seguimiento de la composición de la plantilla. Se supone que bajó la cantidad de mujeres que habían logrado incrementar. Se eliminaron todos los cupos (mujeres, personas trans y con discapacidad) y volvieron a aparecer lógicas de exclusión”, explica una trabajadora de una empresa adherida al programa.

En otra de las empresas, una trabajadora afirma que sus jefes “abandonaron toda intención de sostener las políticas de igualdad que se habían construido, dejando

completamente desprotegidas a las trabajadoras del área en los distintos espacios de trabajo. Muchas de ellas quedaron sin tareas y se vieron obligadas a aceptar retiros voluntarios impulsados por la nueva gestión”. Además, quedaron eliminadas de la comunicación interna las palabras género, diversidad e igualdad, y se volvió a utilizar el masculino genérico. En las imágenes aparecen solo varones.

Mía es trabajadora de una agencia territorial en La Plata, fue contratada gracias al cupo laboral travesti trans. Cuenta que desde que asumió Milei, ya no entró a trabajar ninguna más. “Las últimas compañeras que ingresaron fueron en 2023. Había una en cada agencia territorial”. Y señala: “Las personas que hemos sido más castigadas, desde el discurso homofóbico y discriminador, pertenecemos a este colectivo. Ignorando las trayectorias desiguales que hemos tenido, ellos parten de la premisa de que toda persona es igual y que todos partimos desde el mismo lugar”.

Cupo travesti trans ↓ **0** incorporaciones

Las empresas tampoco avanzaron en el cumplimiento de los espacios de cuidado en el trabajo. La Secretaría de Trabajo informó que se firmaron sólo tres convenios en todo 2024.

Las trabajadoras de casas particulares y las mujeres rurales son otros dos grupos que encuentran “la cancha desnivelada”. Quienes trabajan en casas particulares no tienen aumentos desde enero de 2025. Además, se levantó la obligación de los empleadores de informar a las trabajadoras a qué prestador derivan aportes para cobertura de salud y de ART.

Algo similar pasa con las mujeres rurales ante el desarme del Pro-Huerta y otras políticas de apoyo a la producción en la agricultura familiar. Mujeres del MNCI como Carolina y Sofía de Córdoba comparten que “desde el año pasado declaramos la emergencia alimentaria hacia adentro de las comunidades, lo que traducimos como la organización del hambre. Una de las políticas de producción de alimentos que hubo anteriormente permitió fortalecer algunas unidades productivas, como una fábrica de dulce en la ciudad de Deán Funes donde trabajaban compañeras productoras. Esa fábrica está cerrada, no pueden ya sostener la producción. Entonces ahora, por la emergencia alimentaria, ese espacio que era de producción de alimentos lo convertimos en un espacio de cuidado comunitario para enfrentar la

emergencia alimentaria. Estas actividades surgen del hambre”, cuentan. “Antes podíamos vender un lechón, un cabrito y con la jubilación que cobramos poder comprar la comida. Ahora se hace difícil venderlos”.

Carina preside la Cooperativa Agropecuaria Doña Alicia en Albardón, San Juan. Allí producían semillas para el Pro-Huerta, además de hortalizas a campo y bajo cubierta. “El cierre del Pro-Huerta ha impactado de lleno en la cooperativa porque cortó la cadena de producción que teníamos. Ahora se nos dificulta poder seguir invirtiendo en los otros cultivos. Así que nos reorganizamos y vamos a producir menos”. La baja en la producción afecta directamente a quienes integran la cooperativa, la mayoría mujeres: “Han tenido que salir a buscar otros rubros, otra entrada de dinero por otro lado. Y la verdad que no es fácil para ellas, porque son mujeres que no saben hacer otras cosas que producir hortalizas”.

Hacer en la cocina

La cocina de los cuidados se puso en funcionamiento en marzo de 2024 como un espacio intersectorial y transversal de seguimiento y producción de información sobre las medidas del gobierno en el campo de los cuidados. Está integrada por representantes de organizaciones sociales y de derechos humanos, sindicatos, Iglesias, la academia, funcionarias y legisladoras de distintas fuerzas políticas. Cada tres meses, *La cocina* elabora una base de información dinámica y colaborativa que registra y sistematiza el impacto de los cambios en las principales políticas que se habían logrado para avanzar hacia una organización social de los cuidados más justa e igualitaria.

Este quinto informe de *La cocina* fue elaborado por Lucía Cirmi, María José Rodríguez, Virginia Franganillo, Luciana Vidal, Martina Noailles, Zoé Decros y Lucía de la Vega en diálogo con la Mesa Intersectorial de *La cocina de los cuidados*. Los testimonios que contiene este informe fueron tomados gracias a la colaboración de quienes integran la Mesa.

Integran *La cocina de los cuidados* Norma Morales y Dina Sánchez de la UTEP; el Padre Francisco “Paco” Oliveira de la Fundación Isla Maciel; la Asociación Civil “La Poderosa”; la Confederación de los Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA); Gladys Gómez del Frente Popular Darío Santillán; Elisa Pineda y César Perri de la Fundación de Organización Comunitaria (FOC); Ana Gamarra, Florencia Martí y Nelly Quispe del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL); Daniel Sánchez del Centro Angelelli; María Luisa Storani del Centro de la Mujer de San Fernando (CEDEM); Norma Sanchís de la Asociación Lola Mora; María Rosa Martínez, senadora provincial; Mónica Macha, diputada nacional; Esteban Paulón, diputado nacional; los y las académicas Elizabeth Jelin, María del Carmen Feijoo, Eleonor Faur y Alexander Roig; Emilia Trabuco de la Secretaría de Géneros de la CTA; Adriana Vaghi de CICSA Ciudades Feministas; Mónica Roqué de la Asociación Latinoamericana de Gerontología Comunitaria; Patricia Redondo, directora provincial de Educación Inicial bonaerense; Mercedes Contreras, directora de Infraestructura Social en el Ministerio de Infraestructura bonaerense; Gabriela Bauer, médica pediatra ex directora del Hospital Garrahan; Cristian Silva, ex director del Mapa Federal del Cuidado en el MMGyDS; Carolina Buceta de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), Julieta Campana y Florencia Cascardo del Observatorio de

Géneros y Políticas Públicas; Edurne Cárdenas e integrantes del CELS, de las distintas áreas que trabajan cuidados.

Si querés recibir la información que producimos escribinos a <lacocinadeloscuidados@gmail.com>.